

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ**SECRETARIA JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA)**

Septiembre 07 de 2022: Al despacho el proceso contra **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** identificado con C.C No. 1.073.505.128, informando que por segunda vez conocerá de las presentes diligencias, toda vez que el expediente se recibió en fecha 17 de agosto de 2022, procedente del Centro de Servicios Administrativos de Bogotá D.C. – homólogo 16 -, y con solicitud de LIBERTAD CONDICIONAL invocada por el condenado, a quien mediante auto del 31 de marzo de 2022, negó la libertad condicional, pero concedió al infractor la prisión – artículo 38G del C.P. -, y en cumplimiento de sus obligaciones prestó caución mediante póliza judicial NB-100344293 del 4 de abril de 2022 y suscribió diligencia de compromiso el 6 de abril de 2022; fijó su domicilio en la **Calle 15 No. 15-66 de Funza Cundinamarca**.

Es de anotar, que el homólogo 16 de Bogotá D.C., mediante providencia del 14 de septiembre de 2020, resolvió DECRETAR la acumulación jurídica de penas fijando la pena principal de **64 meses y 24 días**, por las sentencias: i) radicado CUI **252866000376201401665**, sentencia proferida el 18 de enero de 2018 por el Juzgado Penal Municipal con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, condena 36 meses de prisión, delito Violencia Intrafamiliar Agravada y ii) radicado CUI **254306000660201401316**, sentencia proferida el 28 de enero de 2020 por el Juzgado Penal del Circuito con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, condena 36 meses de prisión, punible favorecimiento para la comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Verificado el proceso se observa que en el auto por el cual el homólogo 16 de Bogotá D.C., concedió la acumulación jurídica de penas al condenado, se cometió un error respecto al radicado CUI 254306000660201401316, siendo correcto el número **CUI 254736101132201780049 para la sentencia proferida el 28 de enero de 2020, por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, delito favorecimiento para la comisión de delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, condena TREINTA Y SEIS (36) PRISIÓN.**

Se deja constancia, que el día 22 de agosto de 2022, siendo las 08:50 horas comparece personalmente al despacho el señor Guillermo Rincón Silva – progenitor del condenado, quien suministra el correo electrónico duques1012@gmail.com y el número telefónico 3135923991 para notificación del condenado.

Por lo anterior, la oficial mayor de este Juzgado estableció comunicación al mencionado abonado telefónico el día 2 de septiembre de 2022 siendo las 14:50 horas, llamada atendida por el condenado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** quien manifestó que para notificaciones además del correo electrónico informado por su progenitor, se tuviera en cuenta andresrinconbuitrago@gmail.com

Este despacho conocerá del presente asunto, como **REINGRESO** y tomar el mismo número interno 2018-0162 asignado mediante el **AVÓQUESE** del 8 de junio de 2018. Sírvase proveer.

BLANCA CECILIA GUTIERREZ
SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ – CUNDINAMARCA

Septiembre siete (07) de dos mil veintidós (2022)

AUTO INTERLOCUTORIO No. 0477

CUI ACUMULADO:	252866000376201401665 / 254736101132201780049
Condenado:	GUILLERMO RINCON BUITRAGO
Delitos:	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA – FAVORECIMIENTO PARA LA COMISIÓN DEL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES
Lugar de reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – CPMSC BOGOTA D.C. – LA MODELO
Solicitud:	LIBERTAD CONDICIONAL
Decisión:	AUTO ORDEN REINGRESO POR COMPETENCIA NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL – falta documentos artículo 471 del C.P.P.

1.- OBJETO DE LA DECISIÓN

Se procede a dar trámite a la solicitud de libertad condicional allegada con el expediente, invocada por el sentenciado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** identificado con C.C No. 1.073.505.128, quien se encuentra bajo el sustituto de prisión domiciliaria – vigilancia electrónica - en la **Calle 15 No. 15-66 de Funza Cundinamarca**, vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -.

2.- ASUNTO

Aunque la Ley 1709 de 2014 adicionó para los Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad las audiencias virtuales con el fin de resolver mediante audiencia pública las peticiones de los condenados, la misma no se puede llevar a cabo debido a que no se cuenta en este momento con la infraestructura necesaria y, además, la misma Ley concedió un término de un (1) año al Consejo Superior de la Judicatura y a la USPEC para implementar el sistema. Por lo anterior procede el Juzgado a pronunciarse sobre la petición incoada bajo las normas de la Ley vigente.

3.- ANTECEDENTES PROCESALES

Radicado CUI 254736101132201780049, por hechos ocurridos el 5 de mayo de 2017 y preacuerdo aprobado el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento mediante sentencia del 28 de enero de 2020, condenó a **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** a la pena principal de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN**, como responsable del delito de **FAVORECIMIENTO PARA LA COMISIÓN DEL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES, ACCESORIOS O MUNICIONES**, y a la pena accesorio de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un periodo igual al de la pena privativa de la libertad. **NEGÓ** la suspensión condicional de la ejecución de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

pena y la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 28 de enero de 2020.

El homólogo 3º de Bogotá D.C., mediante auto del 7 de julio de 2020, remitió el expediente al homólogo 16 de Bogotá en calidad de préstamo para el estudio de la acumulación jurídica de penas con el radicado CUI 252866000376201401665, por lo que el Juzgado 16 de la misma especialidad avocó conocimiento del asunto el 5 de agosto de 2020.

Radicado CUI 252866000376201401665, por hechos ocurridos el 27 de octubre de 2014 y preacuerdo aprobado, el Juzgado Penal Municipal con función de conocimiento de Funza Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de enero de 2018, condenado a **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** a la pena principal de **TREINTA Y SEIS (36) MESES DE PRISIÓN** por el punible de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA (artículo 229 del C.P.)**, como cómplice responsable del delito de **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA** y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual de la sanción principal. NEGÓ la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. El fallo condenatorio cobró ejecutoria el 18 de enero de 2018.

En audiencia de incidente de reparación integral el 23 de mayo de 2018, realizada ante el Juzgado Penal Municipal de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, se ordenó el ARCHIVO, dado que la pretensión no fue soportada con pruebas y no cumplió con los requisitos para avalar la misma.

Este Juzgado avocó conocimiento del asunto el 8 de junio de 2018 y dispuso librar orden de captura en contra del condenado y a través de auto del 28 de marzo de 2019, solicitó ante la dirección del Establecimiento Carcelario de Bogotá D.C. – La Modelo -, sobre la información jurídica del condenado, fecha de captura, número de proceso, delito y la autoridad a cuya disposición se encuentra, boleta de encarcelación, acta de derechos del capturado y demás documentos de permanencia del condenado en centro de reclusión.

Mediante auto del 18 de junio de 2019, este Juzgado legalizó la captura del condenado expidiendo boleta de encarcelación No. 0064 ante el señor director del Centro Carcelario y Penitenciario de Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, por auto del 20 de junio de 2019 ordenó remitir el expediente al Centro de Servicios Administrativos de Bogotá D.C. – reparto -, por competencia.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., avocó conocimiento del proceso el 27 de septiembre de 2019, y mediante proveído del 27 de julio de 2020, negó la prisión domiciliaria transitoria – decreto 546 de 2020 -.

El homólogo 16 de Bogotá D.C., mediante decisión del 14 de septiembre de 2020 resolvió **DECRETAR la acumulación jurídica de penas** que le fueron impuestas a **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** por los radicados **CUI 252866000376201401665 / 254306000660201401316**, fijando la pena principal de **SESENTA Y CUATRO (64) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS DE PRISIÓN**, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal acumulada.

Por auto del 9 de noviembre de 2020, negó la libertad condicional al infractor y mediante proveído del 13 de agosto de 2021 negó la prisión domiciliaria del artículo 38G del C.P., como quiera que ésta decisión fue objeto de recurso, el homólogo 16 de Bogotá D.C., mediante providencia del 29 de noviembre de 2021 resolvió reponer el auto en el sentido de que le asistió la razón al recurrente ya que fue errónea percepción del Juzgado al determinarse que el sentenciado residirá en el domicilio de la víctima, por lo tanto,

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

mediante decisión del 30 de noviembre de 2021 negó la prisión domiciliaria art. 38G del C.P.

A través de auto del 31 de marzo de 2022 el homólogo 16 de Bogotá D.C., negó la libertad condicional la sentenciado, pero CONCEDIÓ la prisión domiciliaria – artículo 38G del C.P., por lo que el señor **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** prestó caución por el equivalente a DOS (2) SMLMV, mediante póliza judicial NB100344293 del 4 de abril de 2022¹ y suscribió diligencia de compromiso el 6 de abril de 2022² y expidió Boleta de Traslado por Prisión Domiciliaria No. 009/22³

Mediante decisión del 22 de abril de 2022 el homólogo 16 de Bogotá D.C., aclaró todas las providencias, en el sentido de indicar que el código único de identificación que realmente corresponde al proceso adelantado contra **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** por el delito de violencia intrafamiliar agravada es el **25286 60 00 376 2014 01665 00** y no el 25430 60 00 376 2014 01665

A través de auto del 11 de julio de 2022, ordenó la remisión del expediente por competencia a este Juzgado, con solicitud de libertad condicional interpuesta por el sentenciado pendiente por resolver.

En esta oportunidad ingresa al despacho para resolver la petición de libertad condicional invocada por el condenado.

3.1 Sobre EL COVID-19

Es de resaltar que debido a la pandemia que se sufre a nivel mundial y en la cual mediante Decreto 457 del 22 de marzo del 2020 expedido por la Presidencia de la República en el que declaró el estado de emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional y en Acuerdos PCSJA20-11517, 11518, 11519, 11521, 11526, 11527, 11528, 11529, 11532, 11546 y 11549 del 7 de mayo de 2020⁴ del Consejo Superior de la Judicatura, entre otras decisiones, prorrogó a los servidores de la Rama Judicial el trabajo de manera preferente en su domicilio con el fin de evitar la propagación del COVID-19.

En efecto, según las anteriores determinaciones, el INPEC, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 92 de la Ley 1709 de 2014, declaró el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional mediante Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020. Del mismo modo en comunicación de fecha 14 de abril de 2020 mediante datos aplicativo misional SISIPEC WEB sostiene que: "[...] De las 120.667 personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios y carcelarios, un total de 112,272 son hombres y 8,395 son mujeres. Asimismo, ese total, 36.240 están sometidas a medida aseguramiento de detención preventiva y 84.427 cumplen la ejecución de pena en establecimientos carcelarios y penitenciarios".

Al ser declarada esa Emergencia Sanitaria - Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 -, por el Ministerio de Salud y Protección Social, se deben adoptar medidas adicionales en materia de prevención y contención de la enfermedad coronavirus COVID-19, y, en procura de lo anterior, es tarea del Estado proteger especialmente a aquellas personas

¹ Archivo 43 – expediente digitalizado

² Archivo 46 – expediente digitalizado

³ Archivo 48

⁴ ARTÍCULO 5. Prestación del servicio. Mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3º del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3º del Decreto 531 de 2020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

que se encontraren en condición de debilidad manifiesta de conformidad con el artículo 13 de la Carta Política.

Que la honorable Corte Constitucional, tras la verificación de constante vulneración los derechos a la población privada de la libertad y el aumento en los índices de hacinamiento dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, profirió sentencias T-153 de 1998, T-388 de 2013, T-762 2015, y el Auto 121 de 2018, por medio los cuales reitera el Estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario e indica cuáles serían las acciones necesarias a implementar de cara a mitigar grave situación de derechos humanos de personas privadas de la libertad.

Sobre este tópico la Ley 65 de 1993 en su artículo 104 nos señala el acceso a la salud de los privados de la libertad.

En este sentido, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, entre otras recomendaciones emitidas el 25 de marzo de 2020 para procurar la protección efectiva de la población privada de la libertad ante la actual crisis sanitaria, estimó razonable la disminución de la *población penitenciaria por medio de esquemas de liberación temprana, provisional o temporal*, dando prelación a los casos de reclusos en establecimientos cuya capacidad haya sido excedida (hacinamiento) y en aquellos en donde se verifiquen particulares condiciones de vulnerabilidad al contagio de la enfermedad.

Que el actual confinamiento convierte a los establecimientos penitenciarios y carcelarios en una zona de transmisión significativa de la enfermedad coronavirus COVID-19, y/o otras enfermedades lo que puede poner en riesgo el Estado salud de todas personas que interactúan en dicho entorno.

Así, con miras a la mitigación de la situación de crisis en los establecimientos carcelarios derivada de la pandemia, en aquella calenda el Gobierno Nacional mediante el Decreto 546 de 2020 *adoptó medidas sanitarias tendientes a la protección de la población carcelaria vulnerable frente al COVID-19 y se ocupó de establecer mecanismos para combatir el hacinamiento carcelario, así como para prevenir y mitigar la propagación de la pandemia*⁵.

Bajo este punto reglamentó la concesión de la detención (fase investigativa y de juzgamiento) y la prisión domiciliaria (fase de la vigilancia de la pena) transitorias por el término de 6 meses, excluyendo tipos penales, debido a su gravedad.

De acuerdo a lo anterior las autoridades judiciales no pueden estar al margen de la situación de crisis actual, y que, por el contrario, deben adoptar medidas necesarias y razonables para conjurar, en el marco de sus funciones constitucionales y legales, la problemática que se presenta en los centros de reclusión. Ahora dado que la Presidencia de la República puso fin al término de la emergencia ello no obsta para el cuidado que se debe tener por el COVID y el control sanitario de los Centros Carcelarios, Penitenciarios y Estaciones de Policía ante la crisis de los hacinamientos ocurridos en los últimos tiempos y los nuevos brotes que se han generado en la actualidad.

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. Competencia

Este juzgado es competente para decidir sobre la solicitud impetrada por el condenado conforme lo señalan los numerales 1, 3 y 7 del artículo 38 de la Ley 906 de 2004, así como de la vigilancia del proceso al estar purgando pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria – vigilancia electrónica - en la **Calle 15 No. 15-66 de Funza Cundinamarca**,

⁵ CSJ RAD 794 (01-07-20)

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

vigilado por la Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, conforme los Acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, en especial, el Acuerdo No PSAA07-4119 del 9 de agosto de 2007⁶.

Conforme a los hechos ocurridos el 5 de mayo de 2017 y 27 de octubre de 2014, **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** fue investigado y condenado bajo el imperio de la Ley 599 de 2000 y 906 de 2004 (modificada por la Ley 1709 de 2014).

4.2. De la Libertad Condicional

La libertad condicional es uno de los mecanismos sustitutivos de la pena consagrados por el Legislador, en el cual el Estado en busca de prevenir la criminalidad, sustrae del ambiente carcelario a aquellos autores de delitos y propende que su resocialización ha enmarcado unos requisitos que, al cumplirlos benefician al infractor en su concesión **anticipada** de libertad bajo unas exigencias estipuladas en el artículo 65 de la Ley 599 de 2000.

En lo concerniente al instituto de libertad condicional expresa taxativamente la norma:

“ARTÍCULO 64. Libertad condicional. El juez, previa valoración de la conducta punible, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos:

- 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena.***
- 2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena.***
- 3. Que demuestre arraigo familiar y social.***

Corresponde al juez competente para conceder la libertad condicional establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación, la existencia o inexistencia de un arraigo.

En todo caso su concesión estará supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se demuestre insolvencia del condenado.

El tiempo que faltare para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”⁷ (resaltado fuera del texto original).

De conformidad con lo dispuesto por la norma citada de manera precedente, corresponde entonces verificar el cumplimiento de cada uno de los presupuestos determinados por la misma.

La norma en cita está directamente ligada y supeditada el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal que expresa:

Art. 471.- “El condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el Código Penal podrá solicitar al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad la libertad condicional, acompañando la resolución favorable del Consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal, los que deberán ser entregados a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes.

⁶ 12.2 Circuito Penitenciario y Carcelario de Facatativá cuya cabecera es el municipio del mismo nombre, con competencia sobre los municipios que conforman los Circuitos Judiciales de Facatativá, Funza, Villeta y **Guaduas** (a este último municipio le crearon circuito penitenciario)⁶.

⁷ Artículo 64, Código Penal, modificado por el artículo 30 de la Ley 1709 de 2014

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Si se ha impuesto pena accesoria de multa, su pago es requisito imprescindible para poder otorgar la libertad condicional.” (Subrayado fuera del texto original) ⁸

Pese a que el precitado artículo impone el pago de la pena de multa para otorgar el beneficio liberatorio, el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 1709 de 2014, como norma rectora señala lo siguiente:

“Parágrafo 1°. En ningún caso el goce efectivo del derecho a la libertad, a la aplicación de mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o a cualquier otro beneficio judicial o administrativo, podrá estar condicionado al pago de la multa” (Subrayado fuera de texto).

De acuerdo al citado parágrafo, no resulta plausible negar el beneficio de la libertad condicional en aquellos casos en los que se haya impuesto pena de multa, bajo el argumento de que su pago no se ha hecho efectivo.

Aterrizando al estudio concreto del asunto, este funcionario entrará a determinar si el solicitante cumple con el lleno de los requisitos para acceder al beneficio de la libertad condicional.

Es importante resaltar que aunque fue voluntad del legislador restringir cierta clase de delitos en la concesión de los mecanismos sustitutivos de la pena o los beneficios administrativos para los jueces de conocimiento en el momento de emitir la sentencia, también se tiene que con la ley vigente (1709) en su **artículo 68 A** restringió su no concesión en algunos delitos relacionados en la norma y de los cuales fue condenado el infractor, sin embargo el mismo legislador dispuso en el parágrafo 1° de la mentada norma que no se aplicaría el artículo **a la libertad condicional (art 64 CP)**, NI TAMPOCO PARA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 38 G. Por lo anterior este funcionario no tendrá en cuenta los delitos endilgados para el mecanismo sustitutivo a estudiar, pero sí los demás presupuestos consignados en la norma.

4.3. Cumplimiento de las tres quintas (3/5) partes de la condena.

Al verificar el primero de los presupuestos, esto es, que el sentenciado cumpla con el requisito objetivo determinado por la ley a fin de acceder al beneficio deprecado, se tiene que en el caso que nos ocupa, las tres quintas (3/5) partes de la pena principal de **64 meses y 24 días de prisión – acumulados** -, impuesta al interno corresponde a **38 meses y 26.4 días**. Teniendo en cuenta que el condenado ha estado privado de la libertad dentro del presente asunto desde el **18 de junio de 2019** hasta la presente fecha, por lo que se infiere que ha cumplido físicamente **1178 días que equivalen a 39 meses y 8 días de la pena impuesta**.

El sentenciado cuenta con un total de redenciones de pena de **12 meses, 7.5 días y 12 horas** reconocidas por el homólogo 16 de Bogotá D.C., así:

- Auto del 3 de febrero de 2020, reconoce 2 meses y 4 días
- Auto del 9 de marzo de 2020, reconoce 1 mes 1 día
- Auto del 27 de julio de 2020, reconoce 1 mes y 29 días
- Auto del 31 de marzo de 2021, reconoce 2 meses 0.5 días
- Auto del 13 de agosto de 2021, reconoce 2 meses y 1 días
- Auto del 31 de marzo de 2022, reconoce 3 meses, 2 días y 12 horas

⁸ Artículo 471, Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

En este orden de ideas, del tiempo purgado físicamente se observa que el infractor cumple con un total de **CINCUENTA Y UN (51) MESES, QUINCE PUNTO CINCO (15.5) DÍAS y DOCE (12) HORAS** de la pena impuesta.

Para mayor claridad sobre el tópico analizado téngase el siguiente diagrama:

CAPTURA	18 de julio de 2019
TIEMPO FÍSICO	39 meses y 8 días
TIEMPO REDIMIDO	12 meses, 7.5 días y 12 horas
TOTAL DESCONTADO	51 meses, 15.5 días y 12 horas
PENA PRINCIPAL	64 meses y 24 días -acumulada-
3/5 PARTES DE LA PENA	38 meses y 26.4 días

Como se expresó, el sentenciado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** hasta la fecha acumula un total de **CINCUENTA Y UN (51) MESES, QUINCE PUNTO CINCO (15.5) DÍAS y DOCE (12) HORAS** purgados de la pena impuesta, significando ello que **cumple** con el presupuesto objetivo para acceder al beneficio de libertad condicional.

4.4. Adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro o domicilio de reclusión.

La concesión de este instituto jurídico llamado beneficio de la Libertad Condicional, es complejo, en la medida que su procedencia depende de una serie de presupuestos que no están a prima facie al alcance de este funcionario judicial, y que se encuentran dispuestos por el artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 1709 de 2014 - Artículo 30, y por el artículo 471 del Código de Procedimiento Penal, que imponen la existencia de ciertos documentos emanados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario donde se certifica el cumplimiento de ciertos requisitos.

En efecto, el artículo 471 del C.P.P., establece que el condenado que se hallare en las circunstancias previstas en el código penal, podrá solicitar al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la libertad condicional ***“acompañando la resolución favorable del consejo de disciplina, o en su defecto del director del respectivo establecimiento carcelario, copia de la cartilla biográfica y los demás documentos que prueben los requisitos exigidos en el Código Penal.”*** (Negritas fuera de texto).

Luego entonces, visto que el procesado a la fecha no posee ningún documento, esto es, **la respectiva Resolución Favorable**, requisito éste contemplado en el citado artículo 471 del C.P.P., resulta obligado improbar la concesión del Beneficio de la Libertad Condicional impetrado por el sentenciado, por lo que consecuentemente se procederá a ordenar que por secretaria sea requerido el señor director de la **Cárcel y Penitenciaria Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo** -, a fin de que remita a este despacho judicial la respectiva Resolución Favorable o desfavorable y demás documentos que señala el mencionado artículo.

4.5. Del CUI 54306000660201401316 siendo correcto el 25473610113220178004 de la sentencia emitida el 28 de enero de 2020.

Verificado el proceso se observa que en el auto por el cual el homólogo 16 de Bogotá D.C., concedió la acumulación jurídica de penas al condenado, se cometió un yerro respecto al radicado CUI 254306000660201401316, siendo correcto el número **CUI 254736101132201780049** para la sentencia proferida el 28 de enero de 2020, por el Juzgado Penal del Circuito de Funza Cundinamarca con función de conocimiento, delito favorecimiento para la comisión de delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, condena **TREINTA Y SEIS (36) PRISIÓN**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

Lo anterior, tal y como se evidencia en el acta de sentencia condenatoria, acta de verificación de preacuerdo, escrito de acusación, acta de audiencia de garantías y demás actuaciones procesales, por lo que se itera, **el número correcto asignado es el radicado CUI 254736101132201780049**

En consecuencia, este despacho **TENDRÁ EN CUENTA el radicado acumulado CUI 252866000376201401665 / 254736101132201780049**, para todos los efectos legales pertinentes.

4.6. Sobre la Notificación al condenado.

Teniendo en cuenta que **GULLERMO RINCÓN BUITRAGO** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 15 No. 15-66 de Funza Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión al condenado a través del correo electrónico duques1012@gmail.com / andresrinconbuitrago@gmail.com

5. OTROS ASUNTOS.

5.1 DEL ORDEN PARA PROFERIR DECISIONES

Como han sido múltiples los requerimientos por parte de los infractores y de los demás condenados que vigila este juzgado, esto ha ocasionado a su vez, innumerables entradas y salidas del expediente de secretaría al despacho del juzgado, lo cual interrumpe los términos que la ley consagra (Artículo 118 y ss Código General del Proceso).

En efecto aparecen variadas radicaciones que presentan interrupciones de términos al despacho con las diferentes diligencias. Al respecto señala el artículo 18 de la Ley 446 de 1998:

“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social...”

Por lo anterior, no puede este funcionario y sus servidores alterar el turno en que entran al despacho las diferentes solicitudes invocadas por los condenados. Además, se recalca que a raíz de la no prorroga de los juzgados y cargos de descongestión este juzgado quedó con 2.396 asuntos que a hoy se ha incrementado en más de 4.900 procesos que tenemos en estos momentos con conocimiento no solo de la Cárcel de Funza, sino de Villeta, de los Miembros del Ejército EJECO y PONAL, Estaciones de Policía del Circuito de Facatativá, aparte de las prisiones domiciliarias.

Informo que el juzgado en la actualidad cuenta con 5 cargos el del suscrito, un Asistente Social, Un Asistente Administrativo, una Secretaria y un sustanciador designado el pasado 9 de noviembre de 2020.

Además de lo anterior el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la libertad.

Por último, se debe resaltar que los funcionarios en las providencias estamos sometidos al imperio de la ley como lo señala el artículo 230 de la Constitución Nacional, sustento que fue argumentado por la Corte Suprema de Justicia:

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

“... los funcionarios judiciales están sometidos al imperio de la ley, tal como lo establece el artículo 230 de la Constitución Política, de modo que no es posible desconocer el principio de legalidad, principio basilar del Estado Social de Derecho, por abstractos motivos de «justicia y equidad»⁹, a los cuales acudió el representante, o porque se considere, frente a situaciones particulares, que extinguir la acción penal y decretar la cesación del procedimiento por prescripción afecte los derechos fundamentales de las víctimas «al debido proceso y a la tutela judicial efectiva».

... las consecuencias adversas en el evento de adoptar la postura del recurrente serían intolerables, pues no sólo llevaría a adoptar decisiones arbitrarias y subjetivas, en un claro menoscabo de la seguridad jurídica y el principio de igualdad ante ley... (CSJ AP 2 Jul. 2014, Rad. 41793).

En un pronunciamiento reciente, afirmó:

“...6. Finalmente, como en otras ocasiones ha dicho esta Sala, si la administración de justicia adopta decisiones adversas a las peticiones o a los intereses de quienes a ella concurren, no por ello puede concluirse que se han conculcado derechos fundamentales, en la medida que sus providencias sean proferidas por los funcionarios que ostenten la competencia y se sujeten a los cánones constitucionales y legales que reglan su actividad...”¹⁰

De acuerdo a la jurisprudencia y lo señalado por la Carta Política queda entendido de que el funcionario judicial debe ajustarse a la ley por lo que analizadas las diligencias este despacho encuentra que el condenado reúne los requisitos estipulados en la ley.

Por último y en lo que respecta a la presente decisión ello no implica que ese criterio que se adoptó o que lo hayan adoptado otros despacho judiciales, obligue a otros operadores jurídicos de esa especialidad a aplicarlo indefectiblemente a sus asuntos, pues un proceder contrario *“desconocería el principio de imparcialidad en la medida en que el ordenamiento jurídico colombiano, la responsabilidad penal de un individuo se establece, y debe ser así, de manera individual, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que ofrece cada caso en concreto y a las particularidades que rodean el actuar del sujeto agente, las cuales determinan la valoración de los requisitos para acceder o no, a beneficios como la libertad condicional”*.¹¹

5.2. De la Situación Actual del Juzgado.

En una primera oportunidad por disposición del Consejo Seccional de la Judicatura mediante el Acuerdo No CSJCUO20-93 del 7 de diciembre de 2020 AUTORIZÓ, por traslado de sede, el cierre extraordinario de los Juzgados y Centro de Servicios de Facatativá – Cundinamarca, según programación dada para los días 10, 11, 14, 15, 16 y 18 de diciembre de 2020.

Luego una vez instalados en la nueva sede mediante los Acuerdos CSJUA21-30 del 3 de mayo de 2021 el mismo Consejo aclaró el Acuerdo CSJCUC21-126 del 2 de mayo de 2021 autorizó el cierre extraordinario de la Sede Judicial de Facatativá y dispuso *“suspensión de términos de los juzgados que se encuentran ubicados en la sede judicial de Facatativá a partir del 3 de mayo y hasta el 7 de mayo de 2021, inclusive*, debido al ingreso violento de personas no autorizadas que ocasionaron en las instalaciones saqueos, quemas y disturbios en la sede judicial y de allí en adelante hemos tenido que

⁹ Ibídem.

¹⁰ CSJ T 102248

¹¹ C.S.J. RAD 97792

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

ingresar custodiados por la Policía o el Ejército Nacional para poder ubicar y verificar materialmente los procesos para el respectivo pronunciamiento.

Sumado a ello en el Acuerdo CSJCUA21-32 del 7 de mayo de 2021 autorizó a los jueces y empleados adelantar sus funciones de Administración de justicia, mediante la utilización de herramientas tecnológicas y en condiciones de trabajo desde casa. Y se agrega la situación de orden público que se presentó en el municipio de Facatativá que ha sido golpeado de forma indiscriminada por algunos ciudadanos que el viernes 28 de mayo y sábado 29 de mayo de 2021, se presentó en horas de la noche el ingreso violento de personas no autorizadas a la Sede Judicial, que ocasionaron, por segunda vez, daños, hurtos, destrozos y situaciones de vandalismo en general en dicha sede, afectando los despachos judiciales y el centro de servicios judiciales, viéndose afectada la prestación del servicio de Administrar Justicia en la Sede Judicial de Facatativá.

Como consecuencia atendiendo las directrices trazadas por el Consejo Seccional de la judicatura de Cundinamarca y la Dirección Ejecutiva Seccional de Cundinamarca, Bogotá y Amazonas por razones de orden público presentadas en este municipio se ordenó el cierre extraordinario de la Sede Judicial y suspensión de términos hasta el 18 de junio de 2021 y al ser pioneros en la digitalización de los expedientes nos correspondió el alistamiento de todos (4500 aproximadamente) para remitirlos a la ciudad de Bogotá para su digitalización trasladados por la empresa contratada.

Nuevamente se presentaron nuevos actos de vandalismo y en Acuerdo No CSJCUC21-47 del 24 de junio de 2021 el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca autorizó la prórroga del cierre extraordinario y la suspensión de términos de los juzgados de la jurisdicción penal ubicados en la sede judicial de Facatativá (Juzgado 1o y 2o Penal del Circuito de Facatativá-Juzgado 1o y 2o Penal Municipal de Facatativá y Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Facatativá), a partir del 26 de junio y hasta el 29 de junio de 2021. Además, en horas de la noche del 29 de junio se presentaron nuevos actos de vandalismo e incineración en la sede judicial lo que originó una nueva prórroga hasta el 21 de julio de 2021. En el momento a partir del mes de noviembre y diciembre del año anterior nos ubicaron temporalmente en una sede pequeña y a la fecha no nos han remitido los procesos físicos, sino que se trabaja con aquellos que han digitalizado y con la base de datos que no se perdió en los computadores del juzgado.

Del mismo modo con el personal que contamos (juez, secretaria, asistente social, asistente administrativo y oficial mayor (a partir de noviembre de 2020) para la carga laboral el volumen de requerimientos, y la complejidad de los procesos tornan necesario hacer un estudio minucioso de las solicitudes, como en el presente caso en lo referente al procedimiento y estudio de la situación jurídica del sentenciado.

6.- DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE FACATATIVÁ-CUNDINAMARCA,**

RESUELVE

PRIMERO. - Conocer de las presentes diligencias como **REINGRESO** y tomar el mismo número interno 2018-0162 asignado mediante el **AVÓQUESE** del 8 de junio de 2018

SEGUNDO. - **TENGASE EN CUENTA el radicado acumulado CUI 252866000376201401665 / 254736101132201780049,** para todos los efectos legales pertinentes, conforme a lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

REPÚBLICA DE COLOMBIA



JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

TERCERO. - RECONOCER que el sentenciado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** identificado con C.C No. 1.073.505.128, tiene descontado por pena física más las redenciones reconocidas un total de **51 MESES, 15.5 DÍAS y 12 HORAS**

CUARTO. - DENEGAR la concesión del beneficio penal de la Libertad Condicional, al condenado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** identificado con C.C No. 1.073.505.128, de conformidad con lo esbozado en la parte motiva del presente interlocutorio.

QUINTO. - SOLICITAR por la secretaría de este Despacho, ante el señor Director y Asesor Jurídico de la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, la documentación necesaria – art 471 C.P.P. - a fin de resolver la posible libertad condicional del sentenciado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO**.

SEXTO. - Teniendo en cuenta que **GUILLERMO RINCÓN BUITRAGO** se encuentra purgando pena en prisión domiciliaria (Calle 15 No. 15-66 de Funza Cundinamarca), se ordena por la secretaría de este Despacho **NOTIFICAR** el contenido de la presente decisión al condenado a través del correo electrónico duques1012@gmail.com / andresrinconbuitrago@gmail.com

SEPTIMO. - REMITIR copia del presente proveído a la dirección de la Cárcel y Penitenciaría Media Seguridad de Bogotá D.C. – La Modelo -, a fin de que repose en la hoja de vida del sentenciado y se tome atenta nota de ello.

Contra la presente decisión proceden los recursos de reposición y de Apelación.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVÁ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO


JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
FACATATIVA – CUNDINAMARCA
jepmsfac@cendoj.ramajudicial.gov.co

Facatativá, 07 de septiembre de 2022
Oficio No. 2203

Señor:
DIRECTOR
ASESOR JURIDICO
CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD
LA MODELO
Bogotá D.C.
direccion.ecmodelo@inpec.gov.co
juridica.ecmodelo@inpec.gov.co

URGENTE - SOLICITO DOCUMENTACIÓN ART. 471 C.P.P. – LIBERTAD
CONDICIONAL

CUI ACUMULADO:	252866000376201401665 / 254736101132201780049
Condenado:	GUILLERMO RINCON BUITRAGO
Delitos:	VIOLENCIA INTRAFAMILIAR AGRAVADA – FAVORECIMIENTO PARA LA COMISIÓN DEL DELITO DE FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES
Lugar de reclusión:	PRISIÓN DOMICILIARIA (vigilancia electrónica) – CPMSC BOGOTA D.C. – LA MODELO
Solicitud:	LIBERTAD CONDICIONAL
Decisión:	AUTO ORDEN REINGRESO POR COMPETENCIA NIEGA LIBERTAD CONDICIONAL – falta documentos artículo 471 del C.P.P.

En cumplimiento a lo dispuesto en auto de la fecha, le manifiesto que este despacho conocerá de las presentes diligencias como **REINGRESO** y tomar el mismo número interno 2018-0162 asignado mediante el **AVÓQUESE** del 8 de junio de 2018

Por consiguiente, le solicito que remita a este Juzgado los documentos previstos en el artículo 471 del C. de P.P., con el fin de resolver la posible Libertad Condicional a favor del sentenciado **GUILLERMO RINCON BUITRAGO** identificado con C.C No. 1.073.505.128, quien se encuentra purgando pena bajo el sustituto de prisión domiciliaria en la **Calle 15 No. 15-66 de Funza Cundinamarca**

Lo anterior, en aras de salvaguardar los derechos constitucionales del prenombrado.

Agradeciendo su eficaz y oportuna gestión,

Cordialmente,


NELSON NOGUERA PINILLOS
JUEZ